

Una política de tierras verdaderamente adecuada, sería una contribución clave para la paz con justicia social en Colombia.

La Taula Catalana por la paz y los derechos humanos en Colombia, dedicó al tema de la tierra sus recientes IX Jornadas, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Barcelona. Analizando el desigual reparto de la tierra, su acumulación en pocas manos y, por tanto, las nefastas consecuencias que ello ha tenido en la convulsa historia de Colombia de los siglos XX y XXI, *tratamos de averiguar de qué manera una adecuada política de tierras podría contribuir a la paz con justicia social en aquel país.*

Las cifras pueden ayudar a hacerse una idea de la gravedad del tema de la tierra en Colombia: en las últimas 3 décadas, la población desplazada se ha visto obligada a abandonar o ha sufrido procesos violentos de usurpación **de más de 8 millones de hectáreas de tierra**, es decir, alrededor **del 12% de la superficie agropecuaria del país.**

Por otro lado, de acuerdo con el Ministro de Agricultura, **el 40% de la propiedad rural del país no cuenta con títulos de propiedad.** La falta de éstos, sumada a la corrupción y a la violencia generada por los grupos armados legales e ilegales, ha provocado que centenares de miles de familias colombianas hayan visto usurpadas sus tierras. La gran mayoría de esas áreas ha ido a parar a manos de terceros o de testaferros pertenecientes a grupos paramilitares, que han legalizado esos procesos de usurpación a través de procedimientos mafiosos.

Algunas de las consecuencias más recientes de todos esos factores son lamentablemente conocidas; no cabe duda de que la exigibilidad de los derechos a la tierra y al territorio les ha costado a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y de pescadores de Colombia, un sinnúmero de atentados a la integridad y a la dignidad de sus miembros.

En este sentido, desde la Taula por Colombia expresamos nuestra preocupación por el hecho de que, desde el año 2002, más de 70 líderes y lideresas de comunidades desplazadas afro-colombianas e indígenas que luchan por la restitución de sus tierras o por la defensa de sus territorios colectivos han sido asesinados en Colombia. **Y, también, porque durante el año 2011 fueron asesinados 21 defensores/as y líderes/as campesinos, comunales, de víctimas y de restitución de tierras¹.**

En este sentido, cabe recordar que la ONU califica de "extremadamente altos" el riesgo y vulnerabilidad de lideresas y líderes en procesos de restitución de tierras, "habida cuenta", señala este organismo "de los intereses criminales en los predios objeto de restitución".²

Es, además, muy preocupante la información publicada sobre los escándalos de infiltración paramilitar de distintas instituciones estatales (por ejemplo el DAS o el Congreso colombiano). En el tema que nos ocupa, la tierra, es de extrema gravedad la aparición de distintas pruebas -ahora en investigación por la Fiscalía- en las que se muestra cómo el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) fue también fuertemente infiltrado por la estrategia paramilitar, tal como ha reconocido el propio Ministro de Agricultura de Colombia.

¹ Informe "Agresiones contra Defensores/as de los DDHH en Colombia". Programa Somos Defensores. Febrero 2012.

² Informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Marzo 2012.

El congresista colombiano Iván Cepeda califica todos estos hechos como "el concierto para delinquir del despojo, compuesto por una compleja red de funcionarios (...) y una amplia gama de métodos fraudulentos para burlar las medidas de protección de tierras abandonadas y jugosos beneficios otorgados por el Gobierno."

Otro hecho preocupante para la Taula porque pone en riesgo a las defensoras y defensores de DDHH, así como a la población civil en general, es la apuesta del Gobierno Santos por lo que ha bautizado como las "locomotoras agrícola y minera" en Colombia. Se trata de un proyecto aprobado -y que ya ha iniciado su implementación- que encaminará a aquel país hacia un crecimiento del 6% en los próximos años, centrado en 5 grandes ejes, dos de los cuales son el agro-industrial y el minero. Ello, sin importar el alto coste humano y social que ya están pagando los colectivos de las zonas donde estas locomotoras avanzan, es decir, en las áreas rurales de Colombia que, a la vez, son los escenarios del conflicto armado que asola el país.

Un ejemplo reciente es la desviación de un tramo del mayor río de Colombia, el Magdalena, para construir allí una gigantesca represa hidroeléctrica lo que significa, según numerosas organizaciones de ciudadanos y habitantes de la región, el fin de la mayoría de fuentes de empleo ancestrales de las personas de la región, además de numerosos casos de desplazamiento forzado³.

Por todo ello, y como resultado de los temas debatidos en nuestras IX Jornadas, la Taula Catalana por Colombia **considera que:**

1- La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras **es un paso importante pero no suficiente**, tal como expresamos en un documento hecho público a finales del año 2010. Por ello, tenemos el convencimiento de que **prioritaria y necesariamente** debe tenerse en cuenta a quienes reclaman la restitución de sus tierras, en su gran mayoría víctimas, porque les han sido usurpadas mediante mecanismos legales y/o ilegales de despojo, así como a quienes lideran procesos de posesión de la tierra y permanencia en el territorio y que se encuentran en riesgo de ser despojados de ésta. Como señaló recientemente la ONU: "su participación es una condición esencial del enfoque de DDHH y para construir un proceso de reparación legítimo, sostenible y efectivo."⁴

2- Teniendo en cuenta que la mayor parte de asesinatos de líderes/esas reclamantes de tierras y de población desplazada los están perpetrando los paramilitares (denominados Bacrim por el actual Gobierno), **es absolutamente necesario que el Gobierno Santos combata y destruya esas estructuras delincuenciales que aún persisten** y que siguen beneficiando únicamente a narcotraficantes y a paramilitares, perpetuando el despojo de comunidades y familias.

Nos preocupa que, hasta el momento, los vínculos de estos grupos delictivos con parte de la clase política y dirigente de Colombia permanecen casi intactos. Como observa la ONU: "la creciente violencia ejercida por estos grupos representa un factor de riesgo innegable para reclamantes de tierras y para la sostenibilidad de los procesos de restitución en general".⁵

3- En este sentido, la Taula reitera su preocupación por la forma en que representantes del Gobierno actual, incluido el propio Presidente Santos, y grandes medios de comunicación del país, han venido tratando dos casos emblemáticos en los que el conflicto por la tierra está, de uno u otro modo, muy presente: Mapiripán y Las

³ Reportaje publicado en Semana: <http://www.semana.com/nacion/quimbo-cara-cruz-misma-realidad/173407-3.aspx>

Pavas. En ambos casos, el tratamiento de escándalo dado tras la confesa falsedad de supuestas víctimas pone en cuestión la voluntad del actual Gobierno colombiano por llevar a cabo verdaderamente procesos de reparación y restitución de tierras, *con todas sus consecuencias*.

Barcelona, marzo de 2012

Fuentes:

- Informe *“Contra todos los obstáculos. La lucha mortal de los líderes defensores de tierras y territorios en Colombia”*. Por US Office on Colombia-USOC. EEUU, 2011.
- Informe entregado al Gobierno de la *Mesa Nacional de Garantías temática sobre tierras*. Por Techo Común (integrado por las 4 plataformas de ONG y de organizaciones sociales colombianas). Colombia 2011.
- Informe *“Santos... ¿mejor que con Uribe?”. Revictimización contra el MOVICE durante el primer año de Juan Manuel Santos*”. Por Equipo de Protección MOVICE. Colombia 2011.
- Artículo *“Los amigos del gobierno Uribe”* publicado en El Tiempo. Por Iván Cepeda. Colombia, 2011.
- Artículo *“Ley general agraria y de desarrollo rural: último borrador de la controvertida ley de tierras del gobierno colombiano”* en Agencia Prensa Rural. Por César Jerez. Colombia, 2011.
- Carta a distintas autoridades españolas, con consideraciones sobre la Ley de Víctimas. Por Taula Catalana por Colombia. Barcelona, 2010.

⁴ Informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Marzo 2012.

⁵ Ibid, pág. 10